

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Doctora:  
**PATRICIA FEUILLET PALOMARES**  
**Magistrada Tribunal Administrativo del Valle**

<b>ASUNTO:</b>	Impedimento de decisión
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<b>REFERENCIA:</b>	76001-33-33-006-2019-00116-00
<b>ACCIONANTE:</b>	Saida Beatriz de Luque Figueroa <a href="mailto:dianapardo444@gmail.com">dianapardo444@gmail.com</a>
<b>ACCIONADO:</b>	Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.

IMPEDIMENTO SALA DE DECISIÓN

El asunto de la referencia se encuentra pendiente para que el magistrado sustanciador se sirva proveer la admisibilidad de la demanda impetrada por la señora Saida Beatriz de Luque Figueroa a través de apoderada judicial en contra de la Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, sin embargo la Sala de Decisión nos permitimos manifestar el impedimento que nos asiste para conocer del asunto de la referencia, por encontrarnos incursos dentro de la causal 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual consagra lo siguiente:

*“Art. 141. Son causales de recusación las siguientes:*

*1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso”.*

El objeto de la *litis*, versa sobre la declaratoria de nulidad de un acto administrativo ficto o presunto, mediante el cual se resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. DESAJCLR18-5768 de mayo 17 de 2018, el cual se entiende resuelto de manera negativa, pretendiendo la actora el reconocimiento de la bonificación judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013 como constitutiva de factor salarial para todos los efectos legales a partir del 11 de enero del 2013 y, en consecuencia, la liquidación y pago debidamente indexado de lo recibido.

De acuerdo con el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en esta normativa y en el artículo 141 del Código General del Proceso (CGP).



Las causales de recusación establecidas, en los asuntos que se tramitan ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por remisión expresa de los artículos 130, siguientes y 306 del CPACA, tienen como finalidad asegurar la imparcialidad que debe existir en toda actuación judicial y garantizar a las partes la objetividad que se le imprimirá a las decisiones que se adopten en relación con sus pretensiones, con miras a obtener una recta e imparcial administración de justicia. De manera que para garantizar esa imparcialidad, que debe prevalecer sobre cualquier circunstancia de contenido subjetivo que recaiga en el juzgador, se ha instituido esta figura con el fin de que si se considera que el Juez, Magistrado o Consejero se encuentra incurso en alguna de las causales establecidas por la ley, se declare impedido y de no hacerlo él, que las partes puedan recusarlo.

La decisión de declararnos impedidos en el *sub lite* obedece al criterio planeado por el H. Consejo de Estado en el cual ha manifestado:

*“Encontrándose el proceso para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación, los suscritos Consejeros encuentran que se presenta una de las causales de impedimento previstas en el Código General del Proceso para conocer del presente asunto, por cuanto pese a **que dentro del sub lite, a través de auto del 19 de octubre de 2017<sup>1</sup>, se declaró infundado el impedimento manifestado por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en tanto la demandante es beneficiaria del régimen salarial especial de la Fiscalía General de la Nación contemplado en el Decreto 53 de 1993<sup>2</sup>, dicha postura se replanteará en esta oportunidad procesal, por las razones que pasan a exponerse:***

*7. Lo pretendido por la demandante es el reconocimiento de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como factor salarial, a efectos de que se ordene la reliquidación de sus prestaciones sociales con base en dichos emolumentos y la correspondiente indexación.*

*8. Ahora bien, como se expuso, la actora está regulada por el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo artículo 4º ibídem contempló la denominada «prima especial, sin carácter salarial»; por consiguiente, se encuentra contemplada en una disposición diferente a aquella que contempló dicho emolumento para los magistrados, entre otros, del Consejo de Estado, pues de ello se ocupó el legislador a través del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992<sup>3</sup>.*

*9. De lo anterior, se extrae que si bien una y otra prima especial se encuentran reguladas en instrumentos normativos diferentes, lo cierto es que el objeto de discusión en este proceso es el **carácter salarial** del porcentaje devengado a título de prima especial de servicios, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que podría conllevar a un beneficio para los Magistrados que integran esta Corporación.*

<sup>1</sup> Folios 133 y 134 del expediente.

<sup>2</sup> «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.»

<sup>3</sup> «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.  
[...]

**Artículo 15.** Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.» Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz. Además, el fallo establece:



*10. En cuanto a la bonificación por compensación, se trata de aquella contemplada en el Decreto 610 del 30 de marzo de 1998<sup>4</sup>, por el cual creó en el artículo 1º «una bonificación por compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al 60% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura», de la cual serían destinatarios: i) los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; ii) los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; iii) los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; iv) los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; v) los Fiscales del Tribunal Superior Militar, vi) los Fiscales ante el Tribunal de Distrito y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»<sup>5</sup>*

En la providencia citada, si bien se está analizando un asunto donde se pretendía el reconocimiento de la prima especial y la bonificación por compensación como factor salarial, lo cierto es que las mismas razones jurídicas son aplicables al caso objeto de estudio, ello se puede concluir que al igual que en el *sub lite*, lo que se discute es, entre otros, el carácter salarial de la bonificación judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013, en donde el gobierno se comprometió a la nivelación en la remuneración de acuerdo a la Ley 4ª de 1992, la discusión en uno y otro caso será la misma, que no es otra cosa que tener como **factor salarial la bonificación judicial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales**.

En conclusión, teniendo en cuenta los supuestos antes señalados, y al establecerse una postura frente a la normatividad que regula el régimen salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, consideramos los suscritos magistrados que estamos impedidos para conocer de la presente demanda en el proceso de la referencia, ya que actualmente no sólo percibimos emolumentos similares como servidores de la Rama Judicial en calidad de magistrados sino que también, y en razón a ello, se encuentra afectada nuestra imparcialidad para definir la situación en concreto.

En consecuencia, y para todos los efectos previstos en el artículo 131, numeral 4º del CPACA<sup>6</sup>, pongo en conocimiento el impedimento que le asiste a todos los integrantes de esta Sala de Decisión para conocer del presente proceso, procediendo entonces a remitirlo a la Sala que me sigue en turno, la cual, con fundamento en el Acuerdo No. CSJVAA17-1 es la No. 4 SALA FIJA ORAL compuesta en la actualidad por las magistradas Patricia Feuillet Palomares y Luz Elena Sierra Valencia y el magistrado Oscar Alonso Valero Nisimblat en su orden, para lo de su competencia.

Atentamente,

**LOS MAGISTRADOS,**

<sup>4</sup> «por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios».

<sup>5</sup> Providencia de la Sala Plena de la Sección Segunda del 27 de septiembre de 2018 Expediente N°: 25000-23-42-000-2016-03375-01 (2369-2018). Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<sup>6</sup> «Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

“(…) 3. Cuando en un magistrado concorra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la Sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez (…).”



**OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA**

**EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**

**OMAR EDGAR BORJA SOTO**